

**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO
(Y PERSONAS CIUDADANAS)**

EXPEDIENTE: SCM-JDC-313/2022

PARTE ACTORA:
JULIO GARCÍA TOVAR

AUTORIDAD RESPONSABLE:
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

MAGISTRADA:
MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS

SECRETARIA:
ROSA ELENA MONTSERRAT RAZO
HERNÁNDEZ

Ciudad de México, a 12 (doce) de agosto de 2022 (dos mil veintidós)¹.

La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública **confirma** la sentencia que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México emitió en el juicio TECDMX-JEL-280/2022 que confirmó -entre otras cosas- los resultados de la consulta del presupuesto participativo 2022 (dos mil veintidós) en la unidad territorial San Pedro Xalpa en la demarcación Azcapotzalco.

GLOSARIO

| | |
|---------------------|---|
| Alcaldía | Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México |
| Constitución | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |

¹ En adelante las fechas a las que se haga referencia corresponderán al 2022 (dos mil veintidós), salvo precisión expresa de uno distinto.

| | |
|--------------------------------|---|
| Consulta | Consulta del Presupuesto Participativo 2022 (dos mil veintidós) |
| Convocatoria | Convocatoria dirigida a las personas habitantes, vecinas y ciudadanas, a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes integran las Comisiones de Participación Comunitarias de la Ciudad de México a participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022 (dos mil veintidós) |
| Juicio de la Ciudadanía | Juicio de la ciudadanía para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (y personas ciudadanas) |
| Instituto Local | Instituto Electoral de la Ciudad de México |
| Ley de Medios | Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral |
| Ley Orgánica | Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México |
| Ley de Participación | Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México |
| Ley Procesal Local | Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México |
| Órgano Dictaminador | Órgano dictaminador de la alcaldía Azcapotzalco |
| Proyecto Ganador | Proyecto “Buena vista y mejora continua de la Unidad Habitacional San Pedro Xalpa” registrado con el folio IECM-DD03-00410/2022 |
| Suprema Corte | Suprema Corte de Justicia de la Nación |
| Tribunal Local | Tribunal Electoral de la Ciudad de México |
| Unidad Territorial | San Pedro Xalpa (Pblo) perteneciente a la demarcación Azcapotzalco |

ANTECEDENTES

1. Proceso de consulta participativa

1.1. Convocatoria. El 15 (quince) de enero, el Consejo General del Instituto Local aprobó la Convocatoria en el acuerdo IECM/ACU-CG-007/2022² que modificó en cuanto a los plazos de

² Lo que resulta un hecho notorio segundo el artículo 15.1 de la Ley de Medios por estar publicado en el sitio de internet del Instituto Local <https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2022/IECM-ACU-CG-007-2022.pdf>; también resulta orientadora la jurisprudencia

registro de proyectos y su respectiva dictaminación por acuerdo IECM/ACU-CG-031/2022³ del 17 (diecisiete) de marzo.

1.2. Registro de proyectos. En su oportunidad se registraron los proyectos específicos.

1.3. Jornada consultiva. Del 21 (veintiuno) al 28 (veintiocho) de abril se desarrolló la jornada consultiva vía remota. El 1º (primero) de mayo tuvo efecto la emisión de opiniones de manera presencial.

1.4. Resultados. En su momento se declaró cuál era el Proyecto Ganador al obtener la mayoría de las opiniones favorables, resultado que se validó el 1º (primero) de mayo⁴.

2. Juicio local

2.1. Demanda local. El 5 (cinco) de mayo la parte actora presentó su demanda⁵. Con esta el Tribunal Local integró el expediente TECDMX-JEL-280/2022.

2.2. Sentencia impugnada. 30 (treinta) de junio el Tribunal Local resolvió el juicio interpuesto por la parte actora⁶, quien fue notificada el 4 (cuatro) de julio⁷.

de los Tribunales Colegiados de Circuito XX.2o.J/24 de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009 (dos mil nueve), página 2479 y registro 168124. Vinculo consultado el 24 (veinticuatro) de julio.

³ Es un hecho notorio para la Sala Regional, de acuerdo con los fundamentos citados, por estar publicado en la página del Instituto Local <https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECM-ACU-CG-031-2020.pdf>. Vinculo consultado el 24 (veinticuatro) de julio.

⁴ La constancia de validación de resultados puede verse en la página 16 del cuaderno accesorio único del expediente en que se actúa.

⁵ Como puede verse en la página 4 del cuaderno accesorio único del expediente en que se actúa.

⁶ Páginas 77 a 110 del cuaderno accesorio único del expediente en que se actúa.

3. Juicio federal

3.1. Demanda. El 8 (ocho) de julio la parte actora promovió juicio electoral.

3.2. Remisión y turno. El 14 (catorce) de julio se recibieron las constancias en esta Sala Regional. Ese día se integró el expediente SCM-JE-66/2022 que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

3.3. Cambio de vía. Debido a que la Sala Regional consideró que la vía correcta para impugnar la sentencia del Tribunal Local era el Juicio de la Ciudadanía, el 26 (veintiséis) de julio acordó cambiar la vía. Ese día se integró el expediente **SCM-JDC-313/2022** que fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada María Guadalupe Silva Rojas.

El 3 (tres) de agosto se admitió la demanda y, en su oportunidad, se cerró instrucción.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERA. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional es competente para conocer este juicio porque lo promovió una persona ciudadana contra la sentencia emitida por el Tribunal Local en el juicio TECDMX-JEL-280/2022 que confirmó el dictamen recaído al Proyecto Ganador y los resultados del presupuesto participativo en la Unidad Territorial. Esto tiene

⁷ Como puede verse en las páginas 112 y 113 del cuaderno accesorio único del expediente en que se actúa.

fundamento en:

- **Constitución.** Artículos 17, 41 párrafo tercero Base VI, 94 párrafo primero y 99 párrafos primero, segundo y cuarto fracción V.
- **Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.** Artículos 166-11c.) y 176-IV.
- **Ley de Medios.** Artículos 3.2.c), 79.1 y 80.1.f).
- **Acuerdo INE/CG329/2017** emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual aprobó el ámbito territorial de las circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país y su ciudad cabecera⁸.

Esto se debe a que en esos ejercicios de participación ciudadana se encuentra involucrado, entre otros, el derecho político-electoral de la ciudadanía de votar y tomar decisiones en torno a los proyectos que son sometidos a consulta, cuya tutela corresponde, en última instancia, a este tribunal.

Además, el Juicio de la Ciudadanía es la vía idónea para controvertir actos derivados de los procesos de participación ciudadana, ya que en ellos la Ley de Participación hace extensivo el derecho al voto activo y pasivo, por lo que en atención a las razones que sustentan la jurisprudencia 40/2010 de la Sala Superior de rubro **REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO**⁹ es procedente conocer la impugnación de la parte actora en esta vía.

⁸ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 (cuatro) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete).

⁹ Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 7, 2010 (dos mil diez), páginas 42 a 44.

Si bien la jurisprudencia únicamente hace referencia expresa al referéndum y plebiscito, sus efectos son extensivos a las consultas reguladas en la Ley de Participación, atendiendo al principio jurídico que establece que a igual razón debe corresponder igual disposición, de conformidad con el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución.

De ahí que los derechos involucrados en el presente caso se encuentren inmersos en el auténtico ejercicio de la prerrogativa que tiene la ciudadanía para participar activamente y tomar parte en los asuntos vinculados a los mecanismos de participación ciudadana, particularmente con el ejercicio del derecho a votar cuya tutela corresponde al Instituto Local y la impugnación a los tribunales electorales.

SEGUNDA. Requisitos de procedencia. Este medio de impugnación reúne los requisitos establecidos en los artículos 7, 8, 9.1, 13.1.b), 79 y 80 de la Ley de Medios para poder estudiar la controversia.

2.1 Forma. La parte actora presentó su demanda por escrito, hizo constar su nombre y firma autógrafa, identificó la sentencia que controvierte, expuso los hechos y agravios correspondientes y ofreció pruebas.

2.2 Oportunidad. La demanda fue promovida en el plazo de 4 (cuatro) días hábiles que tenía para ello pues se notificó a la parte actora el 4 (cuatro) de julio¹⁰, por lo que el plazo para controvertirla

¹⁰ La cédula de notificación está fechada el 1° (primero) de julio -visible en la página 111 del cuaderno accesorio único de este expediente-, sin embargo, de la razón de notificación correspondiente advierto que se practicó por correo electrónico el 4 (cuatro)

transcurrió del 5 (cinco) al 8 (ocho) de julio¹¹ y presentó la demanda el último día.

2.3 Legitimación. La parte actora cuenta con ella ya que se trata de una persona ciudadana que acude por derecho propio a impugnar la resolución del medio de impugnación que promovió en la instancia local.

2.4 Interés jurídico. La parte actora alega que la resolución del Tribunal Local afecta sus derechos ya que indebidamente determinó inoperantes sus agravios y confirmó el dictamen recaído al Proyecto Ganador y los resultados de la consulta de presupuesto participativo en la Unidad Territorial, lo que confirma el triunfo de un proyecto que a su consideración es ilegal.

Debido a que la parte actora hace valer que la sentencia emitida en el juicio local que promovió vulnera sus derechos, de asistirle la razón, podrían ser reparadas esas afectaciones por la Sala Regional¹².

2.5 Definitividad. Este requisito está satisfecho porque la parte

de julio como se desprende de las constancias visibles en las hojas 112 y 113 del cuaderno accesorio único del expediente en que se actúa.

¹¹ Sin considerar los días 9 (nueve) y 10 (diez) de julio al ser inhábiles por ser sábado y domingo respectivamente, en el entendido de que el plazo se computa en días hábiles, pues el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en su Libro Cuarto -denominado "Procedimientos Electorales"- señala una clara distinción entre los "procesos electorales" (en los artículos 356 a 361) y los "procedimientos de participación ciudadana" (en los artículos 362 a 363) siendo que los procesos de consulta del presupuesto participativo -como el que originó esta controversia- se consideran procedimientos y no procesos por lo que en términos del artículo 7.2 de la Ley de Medios el plazo debe computarse contando solamente los días hábiles. La Sala Regional ha sostenido este criterio, entre otros, en los juicios SCM-JDC-64/2020, SCM-JDC-66/2020, SCM-JDC-208/2022 y SCM-JDC-305/2022.

¹² De esa forma consideró la Sala Superior que se satisface el requisito del interés jurídico como puede verse en la jurisprudencia 7/2022 de rubro **INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO**. Consultable Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003 (dos mil tres), página 39.

actora combate una resolución del Tribunal Local que es la máxima autoridad de la materia en la Ciudad de México y no hay instancia previa que deba agotarse¹³.

TERCERA. Planteamiento del caso

3.1 Pretensión. La parte actora pide a la Sala Regional revocar la sentencia del Tribunal Local y ordenar a dicho órgano jurisdiccional que se pronuncie respecto de la legalidad del Proyecto Ganador.

3.2 Causa de pedir. La parte actora estima vulnerado su derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva porque el Tribunal Local calificó como inoperantes sus argumentos y confirmó el dictamen recaído al Proyecto Ganador y los resultados de la Consulta sin analizar -sostiene- la legalidad del Proyecto Ganador.

3.3 Controversia. La Sala Regional deberá determinar si fue correcto que el Tribunal Local confirmara los resultados de la Consulta -que implica también su validez- o si, como lo afirma la parte actora, su sentencia tiene defectos que harían necesaria su revocación.

CUARTA. Estudio de fondo

4.1 Síntesis de agravios o argumentos de la parte actora y suplencia de la queja. En el análisis de la demanda¹⁴ la Sala Regional aplicará la suplencia de la queja¹⁵ a fin de interpretar o colmar los argumentos que, de ser el caso, por los defectos en su

¹³ De conformidad con los artículos 27 apartado D párrafo 3 y 38 párrafos 1 y 4 de la Constitución Política, así como 30, 31 y 165 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas normas de la Ciudad de México.

¹⁴ Interpretación realizada conforme a la jurisprudencia de la Sala Superior 4/99 de rubro **MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.** Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, año 2000 (dos mil), página 17.

¹⁵ Prevista en el artículo 23.1 de la Ley de Medios.

formulación o falta de técnica, se traducen en principios de agravio o en un agravio deficiente¹⁶.

En ese sentido, la Sala Regional advierte que para demostrar lo incorrecto de la decisión del Tribunal Local de confirmar la validez y los resultados de la Consulta celebrada en la Unidad Territorial, la parte actora expresa los agravios y argumentos que se sintetizan¹⁷ de la forma siguiente:

La parte actora considera que el Tribunal Local transgredió su derecho a una tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 17 de la Constitución, así como los artículos 8 párrafo 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al sostener que sus planteamientos son inoperantes porque no se podía cuestionar la validez de un proyecto que ya había sido sometido a consulta.

Desde su perspectiva, el criterio del Tribunal Local haría imposible para las personas vecinas de la Unidad Territorial cuestionar la viabilidad de los proyectos de presupuesto participativo, porque de acuerdo con esta Sala Regional (en el juicio SCM-JDC-64/2020) tampoco podría ser en una etapa previa ya que la ciudadanía no tendría -en términos generales- legitimación para impugnar los proyectos antes de que fueran votados, ni por una causa que no trascendiera a la jornada consultiva (como se sostuvo en el juicio SCM-JDC-216/2020).

¹⁶ En ese sentido, se necesita la existencia de un argumento limitado por falta de técnica o formalismo jurídico que amerite la intervención en favor de quien promueve por parte de la Sala Regional para que, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 23.1 de la Ley de Medios, esté en aptitud de “suplir” la deficiencia y resuelva la controversia que le ha sido planteada. De esta forma lo consideró la Sala Toluca de este tribunal al resolver el juicio ST-JDC-189/2014.

¹⁷ Conforme a la jurisprudencia 4/99 de la Sala Superior de rubro **MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DE LA PARTE ACTORA**. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 3, año 2000 (dos mil), página 17.

Señala además que -de acuerdo con el criterio de esta Sala Regional en el juicio SCM-JDC-216/2020- lo que impugnó fue la legalidad del Proyecto Ganador y no su viabilidad -pues en su demanda argumentó que el Proyecto Ganador contravenía lo señalado en el artículo 116 de la Ley de Participación Ciudadana-, por lo que no tendría la obligación de controvertir los resultados con base en alguna irregularidad suscitada durante la jornada consultiva como señaló la autoridad responsable.

La parte actora considera que el Tribunal Local, injustificadamente tardó más de 2 (dos) meses en resolver su medio de impugnación, lo que pudo haber hecho irreparable la afectación a sus derechos.

Además, argumenta que la sentencia impugnada no es comprensible para la ciudadanía pues está redactada en más de 80 (ochenta) páginas, la mayor parte son transcripciones de la Ley de Participación y descripción de procedimientos, le generó confusión, y por tanto el Tribunal Local -en su consideración- no cumple con el deber de emitir sentencias con lenguaje accesible y en términos sencillos, garantizando el derecho de acceso a la justicia.

4.2. Análisis de los argumentos de la demanda

Estos argumentos son **infundados**¹⁸. Se explica.

4.2.1. Marco normativo

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede definirse como el que

¹⁸ Es decir, la parte actora no tiene razón.

toda persona tiene para acceder -libre de todo estorbo y dentro de los plazos fijados por las leyes- a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella para que -mediante el cumplimiento de ciertas formalidades- emitan la decisión correspondiente y, en su caso, la ejecuten¹⁹.

En ese sentido, es posible distinguir tres etapas, a las que corresponden igual número de derechos humanos²⁰:

- 1) Una previa al juicio que incumbe al derecho de acceso a la justicia.
- 2) Una judicial, a la que corresponde el derecho al debido proceso.
- 3) Una posterior al juicio, relativa la eficacia de las resoluciones.

Para este caso resulta necesario exponer las etapas de acceso a la jurisdicción y la judicial.

Etapas de acceso a la justicia

El acceso a la justicia significa que todo derecho o interés legítimo puede hacerse valer en un proceso ante un órgano jurisdiccional, quedando constitucional y convencionalmente prohibida toda forma de denegación de justicia²¹.

¹⁹ De acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro **GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES**. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007 (dos mil siete), página 124.

²⁰ Distinguidas por la Primera Sala de la Suprema Corte en las jurisprudencias 1a./J. 103/2017 (10a.) de rubro **DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN**, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), Tomo I, página 151; y la 1a./J. 90/2017 (10a.) de rubro **DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCION. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN**, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017 (dos mil diecisiete), Tomo I, página 151.

²¹ Díez-Picazo, Luis María, *Sistema de Derechos Fundamentales*, 3ª edición, España, 2008 (dos mil ocho), página 428.

Este derecho implica que incluso cuando existe un interés jurídico o legítimo, en tanto que es jurídicamente relevante y por eso digno de protección, debe ser plenamente justiciable. De tal forma que el derecho de acceso a la justicia solo desaparece si no existe un interés mínimamente individualizado.

En este sentido, debe considerarse que el derecho de acceso a la justicia significa que ningún acto de autoridad puede salvarse de ser revisado por las autoridades jurisdiccionales y que el Estado tiene la obligación del Estado de aplicar las leyes -sobre todo las procesales- de la manera más favorable posible para la efectiva iniciación del proceso evitando formalismos²², a lo que se conoce como principio *pro actione*²³.

Este principio opera como criterio para resolver, en caso de duda, si el Poder Judicial debe o no intervenir en el conocimiento de una controversia por lo que en los casos donde exista duda respecto a si un asunto es o no justiciable, debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, a que un tribunal resuelva el conflicto planteado. Esto no implica obviar requisitos de procedencia sino adoptar un criterio favorable a la acción (o derecho a iniciar un juicio) sobre si están cumplidos²⁴.

Etapa judicial

▪ El derecho a obtener una resolución

²² Artículo 17 párrafo primero de la Constitución.

²³ Expresión en latín que puede traducirse como en caso de duda debe favorecerse a quien intenta una acción.

²⁴ Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte 1a. CCVI/2018 (10a.) de rubro **PRINCIPIO PRO ACTIONE. EN SU APLICACIÓN A CASOS EN LOS QUE NO EXISTA CLARIDAD RESPECTO A SI UN ASUNTO ES O NO JUSTICIABLE, DEBERÁ PREFERIRSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN.** Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), Tomo I, página 377.

Cumplidos los requisitos de procedencia y desahogadas las otras fases del debido proceso²⁵, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva comprende el de obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. Sin embargo, no cualquier respuesta que se dé a los argumentos de la parte actora necesariamente satisface este derecho, lo que solo logrará una resolución fundada y motivada, así como congruente y exhaustiva, de acuerdo con los artículos 17 segundo párrafo de la Constitución y 25.2.a. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

▪ **Fundamentación y motivación**

La exigencia del artículo 16 constitucional dirigida a todas las autoridades del Estado mexicano para que funden y motiven los actos que puedan afectar la esfera de derechos de las personas, se traduce en la expresión del precepto aplicable al caso (fundamentación) y de las razones particulares, circunstancias especiales o causas inmediatas tomadas en cuenta para su emisión (motivación)²⁶.

Específicamente sobre la decisión judicial, la motivación permite dar a conocer las razones y elementos que expliquen y justifiquen el sentido de la decisión. Esto orienta la selección de normas aplicadas para fundar la resolución y su interpretación.

²⁵ El debido proceso es una progresión de etapas necesarias para garantizar una adecuada y oportuna defensa. Estas son: **(i)** la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, **(ii)** la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, **(iii)** permitir alegar a su favor y **(iv)** la emisión de una resolución que dirima las cuestiones a debate, según lo establece la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte P./J. 47/95 de rubro **FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO**. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), página 133.

²⁶ Tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de rubro **FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE**. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 151-156, Segunda Parte, página 56. Registro: 234576.

La exteriorización de las razones particulares y el derecho aplicado permiten una adecuada defensa y el eventual control judicial de la resolución.

Cabe destacar que la sola expresión de los motivos que precedieron a la emisión de un acto de autoridad y las disposiciones consideradas como aplicables al caso, no es suficiente para cumplir con el mandato del artículo 16 constitucional ya que solo cubriría un aspecto formal, sino es necesario que esos motivos sean reales y ciertos, así como los preceptos invocados en efecto sean adecuados y de ellos pueda desprenderse el sentido del acto²⁷.

▪ **Congruencia y exhaustividad.**

Para respetar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, las sentencias deben ser congruentes y exhaustivas.

De acuerdo con la Sala Superior, desde un aspecto externo, la congruencia es la exigencia de que las resoluciones guarden plena coincidencia con la controversia, integrada con la demanda y el acto impugnado²⁸.

Así, pueden tacharse de incongruentes aquellas decisiones que: **(i)** otorguen más o menos de lo pedido, **(ii)** concedan una cosa distinta a la solicitada y **(iii)** omitan pronunciarse sobre algunos de

²⁷ En ese sentido lo interpretó la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte donde distinguió del cumplimiento formal y de fondo del deber impuesto por el artículo 16 constitucional, tesis de rubro **FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE**. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXVII, Tercera Parte, página 21. Clave de registro: 265203.

²⁸ La congruencia de las sentencias también tiene una expresión interna, es decir, que no deben existir incoherencias entre las consideraciones o sus puntos resolutiveos. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia de la Sala Superior 28/2009, de rubro **CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA**. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 3, número 5, 2010 (dos mil diez), páginas 23 y 24.

los planteamientos.

De este modo, para determinar si una resolución es congruente o no es necesario confrontarla con la controversia, delimitada por la demanda -pretensión y la causa de pedir- y acto que impugna.

En estrecha relación se encuentra la exhaustividad de las sentencias que es el deber de agotar cuidadosamente todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes en apoyo de sus pretensiones, dando una la resolución completa de la controversia planteada²⁹.

4.2.2. El caso

La parte actora **no tiene razón** al afirmar que el Tribunal Local no atendió correctamente su demanda en que atacaba la legalidad del Proyecto Ganador y no su viabilidad.

En su demanda local, la parte actora argumentó que el dictamen Proyecto Ganador incumplía lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Participación toda vez que prevé la aplicación de recursos públicos en un predio particular, al pretender que se ejecute dentro de una unidad habitacional que obedece al régimen de condominio.

También alegó una falta de fundamentación y motivación, ambigüedad del dictamen del Proyecto Ganador.

Como puede apreciarse, es patente que la parte actora no atacó si el Proyecto Ganador podría ser viable y ejecutable, sino que sus

²⁹ Jurisprudencia de la Sala Superior 43/2002 de rubro **PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN**. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003 (dos mil tres), página 51.

argumentos tendieron a demostrar que se había sometido a Consulta un proyecto -que a la postre había resultado el más votado- que no había sido analizado debidamente y que -a su decir- incumplía con la ley.

Esto es, combatía una cuestión relacionada con la etapa de validación y dictaminación de los proyectos la cual, como señaló el Tribunal Local, inicia con la emisión de la convocatoria para integrar a los órganos dictaminadores y finaliza con la resolución de los medios de impugnación que se presenten en contra de sus determinaciones; todo ello de manera previa a la jornada consultiva.

En este contexto, resulta acertado que el Tribunal Local le haya explicado que, una vez celebrada la jornada consultiva y resultado un proyecto ganador, dicha autoridad jurisdiccional se encuentra impedida para analizar una determinación emitida por el órgano dictaminador, cuando el proceso de presupuesto participativo ya se encuentra en la etapa de resultados y validez de la elección.

En efecto, como expuso el Tribunal Local, pretender impugnar la ilegalidad del Proyecto Ganador o de su dictamen favorable una vez que la jornada consultiva fue celebrada, vulneraría la certeza respecto de los actos emitidos en el proceso consultivo, ya que implicaría la posibilidad de modificar la determinación de qué proyectos podían ser votados; incluso tratándose de proyectos que como en el caso, estos resultaron ganadores, determinación que como se dijo corresponde a una etapa previa.

Así, no existe una vulneración a derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la parte actora porque el Tribunal Local no abordó la temática que le planteó pues la legalidad de los proyectos que se

sometieron a consulta fue decidida por el Órgano Dictaminador antes de la jornada y quedó firme³⁰, dando por terminada la etapa de validación de los proyectos y se pasó a la de jornada electiva en la que la ciudadanía emitió su voto.

De lo hasta aquí expuesto se advierte que en este tipo de ejercicios democráticos también debe aplicarse el principio de definitividad en las etapas, con la finalidad de dar certeza y seguridad jurídica no solo a la ciudadanía que registra proyectos, sino a la que ejerce su derecho al voto activo y a las autoridades que intervienen en el proceso.

Esto es relevante porque este principio de definitividad de las etapas de los procesos -incluidos los de presupuesto participativo- tiende a dar certeza a los mismos, en tanto implica que los actos o resoluciones no impugnados o aquellos que habiéndolo sido, una vez resueltos los medios de impugnación respectivos, adquieren plena eficacia y firmeza en un proceso como el de presupuesto participativo. De ahí que por regla general, si un acto o resolución no es impugnado en tiempo y forma, aunque tenga algún vicio, será eficaz.

La falta de atención a ese principio, provocaría que algunos actos que suceden en la etapa de preparación de la consulta del presupuesto participativo pudieran someterse a la revisión de los tribunales en fases posteriores, como la de resultados, a pesar de que al haber culminado su ejecución de manera efectiva, cobraron eficacia y tienen presunción de validez.

³⁰ Es decir, ya no puede modificarse.

Esto, permitiría poner en entredicho la voluntad ciudadana expresada en las urnas, al cuestionar la validez o legalidad de la aprobación de proyectos dictaminados favorablemente por los órganos dictaminadores; proyectos que se promocionaron y conocieron por las personas que acudieron a votar eligiendo entre ellos y que además -en ocasiones- obtuvieron el triunfo respectivo.

Aunado a lo anterior, también representaría una afectación a los principios de certeza y seguridad jurídica porque una revisión de la legalidad de los proyectos una vez votados implica la alteración de las reglas o condiciones preestablecidas para regir el proceso de presupuesto participativo y bajo las cuales se convocó a la participación ciudadana; es decir, nuevas condiciones que no se conocían y que pueden tener como consecuencia que la voluntad ciudadana se haya expresado sobre proyectos que aun cuando ya se presumen válidos y eficaces, una vez que obtengan la victoria respectiva lo dejen de ser por estas impugnaciones desfasadas.

Todo esto aunado al esfuerzo, desgaste humano, institucional y económico que conlleva implementar el ejercicio de la consulta ciudadana, y que se hayan votado proyectos que a pesar de su presunción de validez y eficacia podrían volverse a impugnar en la etapa de resultados, lo que traería la posibilidad de determinar que desde un principio no debieron declararse como viables o legales, a pesar de que estas determinaciones correspondían a una etapa previa que ya habría culminado.

Ahora bien, no pasa desapercibido que la parte actora refiere que el Tribunal Local pasó por alto lo resuelto por esta Sala Regional en el juicio SCM-JDC-64/2020 donde, estima, se afirmó que la entonces actora contaría con interés legítimo para impugnar la

legalidad de un proyecto en caso de resultar ganador en la etapa de los resultado de la consulta; sin embargo, en aquel asunto, únicamente se trazó una definición en torno a que algunos actos del proceso electivo pueden impugnarse por las personas habitantes de la respectiva unidad territorial cuando estos no hubieran presentado proyectos y, por tanto, no fueran partícipes activas de la consulta; más no dispuso que esto implicaba la posibilidad de cuestionar la legalidad o viabilidad de un proyecto dictaminado favorablemente.

En ese sentido, si bien este órgano jurisdiccional precisó quiénes podrían impugnar y cuándo debían hacerlo, el mencionado precedente, se centró en el caso concreto, sin delinear una regla puntual respecto a qué cuestiones específicas eran las que serían susceptibles de controversia una vez pasada la jornada consultiva, pues esta cuestión debe valorarse caso por caso; concluyendo en el presente que dicha facultad para impugnar no abarca la posibilidad de cuestionar la legalidad de los proyectos que ya fueron votados.

Bajo ese orden de ideas, se estima que lo resuelto por el Tribunal Local explica qué era lo que las personas legitimadas podían controvertir, mediante una interpretación armónica con los principios que rigen estos procedimientos de participación y cuándo podían hacerlo.

Por tal motivo, no hubo una desatención por parte del Tribunal Local al precedente referido, pues el criterio ahí establecido en realidad se limitó a señalar que quienes no hubieran participado en el proceso de consulta mediante el registro de algún proyecto podían acudir a impugnar **el resultado de la consulta**, de ahí que las

consideraciones de la autoridad responsable -lejos de negar el derecho de acceso a la justicia de la parte actora- en realidad habrían contribuido a ordenar y complementar el estudio sobre el interés legítimo de la ciudadanía que participa en estos procedimientos, conforme a lo previsto en la tesis 1a. CLXXXIII/2015 (10a.) de rubro **INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO?**³¹, orientadora en el caso concreto.

Así, en este caso, el Tribunal Local consideró reconocer interés legítimo a la parte actora acorde con el precedente referido, por lo que al enfrentarse a las 3 (tres) preguntas necesarias para determinar el interés legítimo respondió la primera en el sentido de que la parte actora sí podía acudir a la jurisdicción electoral bastándole su calidad de residente o habitante de la unidad territorial en que se había desarrollado la consulta relacionada con su impugnación.

No obstante ello, respecto a las otras preguntas precisó que ese interés sería únicamente para controvertir el resultado de la consulta, determinación que armoniza con el criterio sustentado por esta Sala Regional en el juicio SCM-JDC-64/2020, en la parte que dice: “la actora contaría con interés legítimo para impugnar ese resultado”.

Además, el Tribunal Local precisó que el interés que se reconocía a las personas vecinas de la respectiva unidad territorial era por circunstancias relacionadas con la validez del proceso consultivo

³¹ Consultable en: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Tomo I, Primera Sala de la Suprema Corte, Tesis: 1a. CLXXXIII/2015 (10a.), mayo de 2015 (dos mil quince), página 444.

en sí; es decir, por cuestiones que hubieran trascendido a la jornada o impactado en los derechos humanos involucrados en la consulta, cuestión distinta a los méritos o características del Proyecto Ganador que determinaron su dictaminación positiva.

De esta manera, al estudiar la controversia, el Tribunal Local calificó como inoperantes los agravios de la parte actora que se dirigían a controvertir la viabilidad o legalidad de los dictámenes sometidos a consulta, pues ello implicaba -sustancialmente- revisar actos que surgieron en una etapa anterior a la de resultados de la consulta, en detrimento de los principios de definitividad de las etapas y de certeza jurídica.

De esta forma, aun cuando el proceso de consulta de presupuesto participativo tiene características diferenciadas de los procesos electorales constitucionales para elegir a las personas representantes que ocuparán cargos de elección popular, ello no implica que no se rijan por los principios necesarios o indispensables para todo proceso sometido a una votación ciudadana, pues el principio de definitividad está reconocido en los artículos 41 y 116 de la Constitución y en específico para los procesos de democracia participativa en la Ciudad de México en los artículos 38 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 26 de la Ley de Participación y 28 de la Ley Procesal Electoral Local.

Así, atendiendo a las particularidades del asunto y al hecho de que la interpretación que hizo la autoridad responsable únicamente armoniza su ejercicio con los demás principios aplicables, esta Sala Regional estima que no se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte actora.

En este punto es importante explicar a la parte actora que como se dijo desde el precedente que cita -SCM-JDC-64/2020- no todos los actos son impugnables por cualquier persona, lo cual no implica necesariamente que por ello se vulnere su derecho de acceso a la justicia.

Así, el que la parte actora no hubiera podido impugnar la dictaminación favorable de los proyectos aprobados por el Órgano Dictaminador para ser sometidos a la Consulta en su Unidad Territorial en los términos planteados en el criterio contenido en dicho precedente, pues no había registrado algún otro proyecto ella misma y que, una vez pasada la jornada consultiva no pueda combatir la supuesta falta de legalidad del dictamen del Proyecto Ganador no implica una denegación del acceso a la justicia o que dicho dictamen no pudiera haber sido revisado.

No vulnera su derecho de acceso a la justicia pues uno de los requisitos para que pudiera impugnar el dictamen de algún proyecto en la etapa previa a la jornada consultiva era que hubiese registrado otro proyecto que contendría con ese. En ese escenario la aprobación de un proyecto contrario a derecho podría impactar en su esfera jurídica ya que el registrar un proyecto implica el derecho a que la ciudadanía vote por el mismo -y no por uno ilegal-.

El hecho de que tampoco pueda combatir la dictaminación favorable de un proyecto una vez pasada la jornada consultiva -como se explicó en esta sentencia- no transgrede su derecho de acceso a la justicia pues este, como todo derecho humano tiene límites y uno de esos se encuentra en el respeto a los principios de certeza y seguridad jurídica que protegen los derechos de la

colectividad y la integridad del proceso de la Consulta; además de que en el caso no es posible advertir algún derecho político electoral que pudiera resultar vulnerado a la parte actora por la ejecución del Proyecto Ganador.

Ahora bien, el hecho de que la parte actora no pudiera impugnar -por las razones expuestas- la legalidad del dictamen del Proyecto Ganador que a su consideración es contrario a derecho no implica que el mismo hubiera quedado exento del escrutinio judicial; es decir, no se traduce en que no hubiera podido ser impugnado por nadie. Esto, pues quienes registraron proyectos en la Unidad Territorial sí podían haber combatido el referido dictamen y así, este podría haber sido revisado por los tribunales para verificar -si así se planteaba en la demanda- que estuviera apegado a los principios que señala la parte actora y no implicara -según refiere- el ejercicio del presupuesto participativo en una actividad sustancial que corresponde en exclusiva a la Alcaldía.

Esto, contrario a lo que afirma la parte actora no le dejó sin defensa contra los actos que estimaba contrarios a su derecho a que se les escuchara en un juicio respecto de la legalidad de los proyectos y su eventual ejecución, pues el cumplimiento de los requisitos de procedencia de los medios de impugnación -en la etapa previa a la jornada consultiva- y la salvaguarda de los principios rectores de este tipo de procesos como la certeza y la seguridad jurídicas -en la etapa de los resultados- no son contrarios al derecho de acceso a la justicia sino que debe ser entendido como parte integral del sistema de justicia.

Vista

Ahora bien, a pesar lo señalado al estudiar los agravios o

argumentos de la parte actora, esta sala advierte que ni la Ley de Participación, ni la Ley Procesal Local, ni la Convocatoria, ni la Guía Operativa para el ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2022 de las Alcaldías de la Ciudad de México establecen reglas específicas respecto a los medios de impugnación o recursos que puede interponer la ciudadanía interesada en participar de manera activa en la revisión de la regularidad y legalidad de los distintos actos que conforman el proceso de la consulta del presupuesto participativo, lo que podría desincentivar el interés en dicha participación.

Por ello, se estima conducente dar vista con esta resolución al Congreso de la Ciudad de México, al IECM y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones analicen la pertinencia del actual diseño normativo y si lo consideran necesario o conveniente, realicen las acciones que estimen conducentes.

* * * * *

No pasa inadvertido que la parte actora considera que el Tribunal Local, injustificadamente, tardó más de 2 (dos) meses en resolver su medio de impugnación, lo que pudo haber hecho irreparable la afectación a sus derechos y que el Tribunal Local -en su consideración- incumplió el deber de emitir sentencias con lenguaje accesible y en términos sencillos, garantizando el derecho de acceso a la justicia.

Sin embargo, aún en el supuesto de que la parte actora tuviera razón con esos argumentos, son insuficientes para provocar la revocación de la sentencia impugnada, en atención a lo razonado al responder el planteamiento sobre la vulneración a su derecho de

acceso a la justicia.

* * *

Por último, no pasa desapercibido para esta Sala Regional que mediante acuerdo de 29 (veintinueve) de julio la magistrada instructora requirió a la persona titular del área de participación ciudadana de la Alcaldía, José Luis Peña Mitre³², que:

1. Informara si para la fecha referida el Comité de Ejecución y el Comité de Vigilancia de la Unidad Territorial ya contaba con el calendario tentativo de ejecución del Proyecto Ganador³³.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta, **remita dicho calendario** y las constancias con las que acredite lo informado.

No obstante que la determinación anterior fue notificada a la autoridad requerida mediante notificación personal el 1° (primero) de agosto, no fue recibida respuesta alguna en esta Sala Regional; por lo que el 5 (cinco) de agosto la magistrada instructora declaró

³² Información consultada en la fecha de este acuerdo en la dirección electrónica [Buscador Temático - PNT \(plataformadetransparencia.org.mx\)](http://Buscador_Temático_-_PNT_(plataformadetransparencia.org.mx)), por lo que resulta un hecho notorio, según el artículo 15.1 de la Ley de Medios, resulta orientadora la tesis I.3o.C.35 K (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro **PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL**, consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, noviembre de 2013 (dos mil trece), página 1373.

³³ De acuerdo con la Base Décimo Sexta de la “Convocatoria dirigida a las personas habitantes, vecinas y ciudadanas, a las organizaciones de la sociedad civil y a quienes integran las Comisiones de Participación Comunitarias de la Ciudad de México, a participar en la Consulta de Presupuesto Participativo 2022”, del 14 (catorce) de mayo al 17 (diecisiete) de julio la Asamblea Ciudadana de cada unidad territorial convocaría a la ciudadanía con la finalidad dar a conocer los proyectos ganadores y conformar los Comités de Ejecución y Vigilancia. Asimismo, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo 8 de la “Guía Operativa para el ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo 2022 de las Alcaldías de la Ciudad de México”: una vez electos los proyectos ganadores, ya sea en la jornada electiva o de manera extraordinaria, la Asamblea Ciudadana convocaría en los términos de la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de:

- I. Informar a las personas habitantes de la Unidad Territorial de los proyectos ganadores;
- II. Nombrar los Comités de Ejecución y de Vigilancia;
- III. Informar del mecanismo para que los Comités de Ejecución y de Vigilancia lleven a cabo las tareas asignadas; y I
- V. Señalar un calendario tentativo de ejecución de los proyectos.

incumplido el requerimiento de cuenta y reservó para el pleno de esta Sala Regional la realización del pronunciamiento correspondiente.

Teniendo en consideración lo anterior, se **conmina** a la persona titular del área de participación ciudadana de la Alcaldía, José Luis Peña Mitre que en futuras ocasiones atienda en tiempo y forma los requerimientos formulados por esta autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus atribuciones; esto, pues en caso de no cumplirlos en tiempo y forma en futuras ocasiones, le podrá ser aplicada, en términos del artículo 73 del Reglamento Interno de este tribunal, alguna de las medidas de apremio señaladas en el artículo 32 de la Ley de Medios.

Por lo expuesto y fundado, la Sala Regional

RESUELVE

ÚNCO. Confirmar la resolución impugnada.

Notificar por **correo electrónico** a la parte actora, al Tribunal Local y al IECM; **personalmente** a la persona titular del área de participación ciudadana de la Alcaldía, José Luis Peña Mitre; **por oficio** a al Congreso de la Ciudad de México y a la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México así como **por estrados** a las demás personas interesadas con fundamento en los artículos 26, 28 y 29.5 de la Ley de Medios.

Devolver la documentación que corresponda y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **mayoría** de votos, la magistrada y los magistrados, con el voto en contra del magistrado José Luis Ceballos Daza, quien formula voto particular; esto, en el entendido que Luis Enrique Rivero Carrera funge como magistrado en funciones, ante la secretaria general de acuerdos, quien autoriza y **da fe**.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA, RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA CIUDADANÍA SCM-JDC-313/2022.³⁴

Me permito expresar las razones por las cuales disiento de las consideraciones y sentido de la sentencia aprobada por el voto mayoritario de quienes integramos el Pleno de esta Sala Regional.

● **Justificación de mi disenso.**

En el diverso Juicio de la Ciudadanía **SCM-JDC-216/2020**, fue convicción del suscrito considerar, entre otras cuestiones, que la **dictaminación positiva** de un proyecto de presupuesto participativo, en algunos casos, sí puede ser materia de impugnación aun después de transcurrida la jornada consultiva en la que hubiera resultado como propuesta ganadora. Al efecto, en la sentencia referida se estableció:

“ ...

En las relatadas condiciones, es dable inferir que la actora estaba en potestad de invocar como causas de la presunta ilegalidad de los Proyectos, que los dictámenes

³⁴ De conformidad con los artículos 174, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 48 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

de viabilidad habían sido omisos en determinar ciertos aspectos que estimó relevantes para proteger la vegetación de los camellones que se afectarían al ejecutar las obras descritas y votadas en los referidos Proyectos.

Esto último porque se le dijo que no podía hacerlo en forma previa a la celebración de la jornada electiva, ya que, al no ser una propuesta votada, no existía una afectación para ella ni su comunidad.

En ese sentido, de conformidad con lo que señala el artículo 1° párrafo tercero de la Constitución todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En tal virtud, debe tenerse presente que en la demanda de juicio local se hizo valer la vulneración a dos derechos fundamentales que son interdependientes: el de votar y a un medio ambiente sano, por lo que era necesario verificar la existencia de un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos.

En mérito de dicha interdependencia, en casos como en el presente es viable que a través de la jurisdicción electoral se revisen no solamente actos relacionados con los derechos político electorales, ya que pueden verse involucrados otro tipo de derechos ; así, la controversia debe verse y estudiarse de manera conjunta ya que solamente así podría lograrse un resarcimiento personal -tratándose de una afectación al interés jurídico- o colectivo -en asuntos que involucren el interés legítimo como parte integrante de una comunidad-.

Luego, en el presente juicio la jurisdicción electoral puede tutelar el tipo de afectación que hace valer la parte actora, a efecto de verificar si se cumple o no con alguno de los principios rectores de los procesos de participación ciudadana, lo que señala que puede verse afectado por una indebida ejecución de los Proyectos en relación con la protección al medio ambiente”.³⁵

³⁵ Del veintiséis de noviembre del dos mil veinte.

Así, en la sentencia referida, expuse mi visión en el sentido de que la dictaminación que recae a un proyecto de presupuesto participativo debía ser impugnable aun pasada la jornada consultiva; ello, bajo una lógica de justiciabilidad.

Las razones que me llevaron a esa consideración, fueron entre otras, el reconocimiento de que los procedimientos que se desarrollan para consolidar los valores del presupuesto participativo, están enmarcados en un contexto de interés público, en el que por supuesto, se tiene por una parte a la persona o personas que formulan y someten a consideración un determinado proyecto ciudadano y de otra a la ciudadanía misma que está interesada que los fines del presupuesto participativo no distorsionen y cumplan los fines que tiene encomendados.

Comprender la necesidad de que exista una justiciabilidad objetiva en una etapa posterior a la celebración de la jornada no es más que el reconocimiento que debe profesarse a los principios de legalidad, debido proceso y tutela judicial efectiva, los cuales, tienen asidero en lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desde entonces, evidencí mi posición de que era importante que las personas que habitan en el colectivo poblacional respecto del cual resultó ganador un proyecto de participación ciudadana, cuenten con acción y derecho para cuestionar aspectos relacionados con su legalidad, el cual, por supuesto habrá de estar modulado por reglas y exigencias que también impidan que una excesiva justiciabilidad pueda trastocar su operatividad y eficacia.

En el caso que se analiza, los parámetros específicos del asunto me orientan a mantener una posición diferenciada de la mayoría.

En particular, debo señalar que reconozco que buena parte del análisis efectuado por el tribunal local en la resolución impugnada resulta acertado, en la medida que privilegia una presunción de validez de los proyectos que han sido objeto de votación y han resultado ganadores en la correspondiente jornada, cuestión que es indudable si se atiende a la necesidad un grado importante de certeza y confianza al ejercicio desplegado por la ciudadanía.

Sin embargo, en el ámbito de la impartición de justicia, esa presunción de validez no debe concebirse como una presunción *iuris et de iure* (que no admite prueba en contrario), sino en una presunción *ius tantum* (salvo prueba en contrario), en tanto que debe permitirse un ejercicio objetivo de justiciabilidad que esté dirigido a cuestionar aspectos relacionados con la legalidad integral del procedimiento ciudadano.

En ese sentido, es patente que en el caso, se impugnó la ilegalidad del Proyecto al haber resultado ganador en la consulta ciudadana bajo la argumentación que se consideró pertinente, y el Tribunal Local decidió calificar sus agravios como inoperantes aduciendo que los mismos cuestionaban su incorrecta dictaminación positiva, dejando de lado que en el precedente jurisdiccional federal aludido se sostuvo que las personas ciudadanas estaban en aptitud de acudir a controvertir las propuestas de la consulta una vez que se celebrara la jornada electiva.

De ahí que, respetuosamente, no comparta la decisión esencial a la que se arribó, en el sentido de declarar inoperantes los agravios formulados por la parte actora en la instancia primigenia.

En mi parecer, correspondía a dicho Tribunal local analizar en sus méritos la legalidad integral del proyecto controvertido, a la luz de los agravios expresados en el escrito de demanda, entre ellos, la parte actora acusó la forma en que se votó el re-dictamen y la falta de firmas en el mismo³⁶ –de personas especialistas y por las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez– y, no obstante ello, se acogió como válida dicha re-dictaminación para someter al Proyecto a consulta.

En el presente caso, cobra relevancia que el re-dictamen que recayó a la propuesta fue dubitable por cuanto a que de las constancias que obran en los autos del expediente, es posible advertir las siguientes imágenes de re-dictamen positivo del siete de abril:

³⁶ Con votos en contra y sin firmas de algunas de esas personas.

Logo del Poder Judicial de la Federación y el texto "del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO".

Formato F2 (Definitivo)
Folio: ICG-0039-0301/22

ESPECIALISTAS

EN CONTRA

ALCALDÍA

CONCEJAL

Admisión a la emisión de peticiones

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) Proposición del proyecto No. 1 | b) Comisión de la Alcaldía No. 1 | c) Comisión de la Alcaldía No. 1 |
| Número y Firma | Número y Firma | Número y Firma |

Subsección No. 36, Colonia Rancho Las Cañadas, Toluca, C.P. 48960, Ciudad de México, Comandante Miguel Alemán

Sello circular: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Así, de la imagen inserta se aprecia que solo contó con el voto de dos personas especialistas (de un total de cinco, porque hubieron dos **votos en contra** y un espacio en blanco), en tanto que de la Alcaldía, faltó la firma de la funcionaria administrativa.

Al propio tiempo, de las constancias del expediente se advierte que el Proyecto motivó la emisión de **votos particulares** de cuatro personas especialistas, según se aprecia con las imágenes que se insertan:



TRIBUNAL ELECTORAL
del Poder Judicial de la Federación
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO

SCM-JDC-313/2022

386

ANEXO al Dictamen Técnico del Proyecto de Presupuesto Participativo 2022
RECURSO DE ACLARACIÓN
(REDICTAMINACIÓN)

Unidad Territorial: **MARIA DEL CARMEN**
Clave: 14-022 **DISTRITO 26** Folio: IECM-DD26-00001/22
Denominación del Proyecto: **COMPRA DE UN VEHICULO PATRULLA**
Descripción del Proyecto: **COMPRA DE UN VEHICULO PATRULLA PARA VIGILAR Y PREVENIR LOS DELITOS Y DISMINUIR LA INSEGURIDAD DE LOS HABITANTES MARIA DEL CARMEN UNIDAD TERRITORIAL, 14-22 ALCALDIA BENITO JUAREZ, COADYUVANDO CON EL PROGRAMA BUNDIR CON BENITO JUAREZ, ASI SEA EN BENEFICIO DE LOS VECINOS CON MAYOR SEGURIDAD**

En estudio de la factibilidad del proyecto al rubro indicado, este Órgano, determinó lo siguiente:

Viabilidad técnica: **Al no haber detectado impedimento técnico alguno, se considera FACTIBLE**
Viabilidad jurídica: **Al no haber detectado impedimento jurídico alguno, se considera FACTIBLE**
Viabilidad ambiental: **Al no haber detectado impedimento ambiental alguno, se considera FACTIBLE**
Viabilidad financiera: **Al no haber detectado impedimento financiero alguno, se considera FACTIBLE**

En cuanto a la orientación o intencionalidad del proyecto, este Órgano, consideró que el proyecto pretende:

Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial
Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan en la Unidad Territorial **SI**
Incentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial **-**
Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social **-**

Por mayoría de votos, entre los presentes, este Órgano Dictaminador arribó a la convicción de que la **reconsideración es procedente** y el proyecto debe ser estimado como **FACTIBLE** con la siguiente consideración:

El presupuesto participativo, supone una forma de democracia directa, que permite la incidencia directa de ciudadanos en los proyectos, programas y acciones de gobierno en el ámbito de competencias de la Alcaldía.

Dicha forma de participación, co-decisión y co-gestión de proyectos, programas y acciones, no se constata en la propuesta de proyectos, programas y acciones nuevas o novedosas.

Los ciudadanos dentro de dicha forma de democracia directa, también les es posible apuntalar, reforzar o potencializar otros proyectos, programas o acciones de gobierno de la Alcaldía.

Lo anterior, se corrobora con la simple lectura de lo previsto en el artículo 116 párrafo primero de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que dice: "El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes opinen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales."

Así mismo, es necesario determinar si con el proyecto, se surten los objetivos sociales de dicho instrumento de participación democrática, previstos en el artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que a la letra dice: "Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización democrática a través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria."

Por lo que en un análisis de fondo, lo conducente es determinar si la propuesta implica una mejora de cualquier tipo en la unidad territorial, aunque no se circunscriba específicamente a la ejecución de una obra, la prestación de un servicio, o así mismo, es necesario determinar si la propuesta podrá redundar en la prevención de los delitos dentro de la unidad territorial.

En tal orden de ideas, la procedencia dependerá precisamente de determinar si en caso de llegar a ejecutarse podría dar lugar a una mejora en materia de prevención del delito en la unidad territorial, lo cual no se corrobora con la simple afirmación del promovente.

De acuerdo con "Manual sobre aplicación eficaz de las Directrices para la Prevención del Delito" (2011), emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, la experiencia de Chicago (USA), Dar es Saalam (Tanzania), Johannesburgo (Sudáfrica), incrementar el nivel de patrullaje, es necesario, pero no puede ser la única acción para prevenir en forma eficiente la comisión de delitos.

En virtud de lo cual para que el Proyecto propuesto, surta mejora en la prevención del delito de la unidad territorial, deben cumplirse entre otros extremos los siguientes:

- 1.- El vehículo debe adscribirse al cuadrante o microcuadrante que geográficamente corresponda a la Unidad Territorial como patrulla en el tiempo
- 2.- El vehículo debe contar con asignación de personal, combustible, mantenimiento y equipo necesario para su operación

En tal orden de ideas, la procedencia dependerá precisamente de determinar si en caso de llegar a ejecutarse podría dar lugar a una mejora en materia de prevención del delito en la unidad territorial, lo cual no se corrobora con la simple afirmación del promovente.

De acuerdo con "Manual sobre aplicación eficaz de las Directrices para la Prevención del Delito" (2011), emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, la experiencia de Chicago (USA), Dar es Saalam (Tanzania), Johannesburgo (Sudáfrica), incrementar el nivel de patrullaje, es necesario, pero no puede ser la única acción para prevenir en forma eficiente la comisión de delitos.

En virtud de lo cual para que el Proyecto propuesto, surta mejora en la prevención del delito de la unidad territorial, deben cumplirse entre otros extremos los siguientes:

- 1.- El vehículo debe adscribirse al cuadrante o microcuadrante que geográficamente corresponda a la Unidad Territorial como patrulla en el tiempo
- 2.- El vehículo debe contar con asignación de personal, combustible, mantenimiento y equipo necesario para su operación

CTE
JEN

DM



3.- El reforzamiento de vigilancia policial, en vehículo patrulla, no puede ser la única acción en materia de prevención del delito

En virtud de lo anterior, a juicio de este Órgano Dictaminador, resultó procedente y fundado el presente recurso de aclaración, y la ejecución del proyecto se debe al ser viable en los siguientes extremos:

A. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito de la Alcaldía, mediante instrumento idóneo, certifique que existe un cuadrante o microcuadrante completo que se localice dentro de la Unidad Territorial que no ocupa, así como posibles acciones adicionales en la materia.

B.- La Dirección General de Administración, a través de un instrumento idóneo determine que exista una partida presupuestal que permita a la Alcaldía erogar los gastos de operación y en su caso mantenimiento del vehículo, que puedan surgir a lo largo del tiempo.

C.- Al momento de ejercer el presupuesto, la unidad responsable del gasto, deberá destinar parte del presupuesto, en informar a los residentes de la unidad territorial, que el programa de seguridad de la Alcaldía Bindar BJ, fue reforzado, apoyado, por los propios residentes a través del presupuesto participativo mediante la adquisición de vehículos patrulla

VOTO PARTICULAR, de los especialistas C. Violeta Martínez García, C. Alejandra del Pilar Moreno Rivadeneyra, C. María Guadalupe Calderón Durán, y C. Víctor Isael Damián Cuéllar

No existe forma de garantizar que una vez concretado el ejercicio, se materialice un beneficio en materia de seguridad en forma exclusiva para la unidad territorial del proyecto. Así mismo, el presupuesto participativo, no podría comprometerse para la operación, mantenimiento, y conducción del mismo en términos de Ley. Por otra parte, se considera, que no se ubica dentro de los supuestos previstos en el 117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, pues ello contempla la prevención y no posibles formas de disuasión o control del delito, cosa que implica la adquisición de vehículos patrulla. Por otra parte, estiman que el costo de la adquisición, operación, y mantenimiento, podría exceder el propio presupuesto participativo. El proyecto, podría requerir para su funcionamiento de erogaciones adicionales de parte de la Alcaldía, circunstancia prohibida en el 119 de la Ley. Así mismo, consideran que dicho proyecto, debiese analizarse a la luz de su posible impacto ambiental.

Del mismo modo, advierten que el proyecto consiste en la compra, y no la renta de vehículos patrulla, el rubro deberá precisar que su adquisición deriva del presupuesto participativo, y la unidad territorial correspondiente, y la matrícula que le da tal carácter que el efecto expida la S.S.C.

Así lo proveyeron y firman los integrantes del Órgano Dictaminador en la Alcaldía Benito Juárez, de los Proyectos del Presupuesto Participativo 2022, en sesión pública del 7 de abril del 2022

Rubén Sánchez Hernández
Coordinador de Participación y Concertación Ciudadana
Presidente del Órgano

Julio Rodríguez Leal
Subdirector de Participación Ciudadana
Secretario Técnico del Órgano

Lic. Eduardo Eugenio Urquiza Ista
Director de Recursos Materiales,
Abastecimientos y Servicios

Arq. Esteban Javier Huerta Torres
JUD de Apoyos, Estudios y Proyectos de
Obras por Contrato

Lic. María Alejandra Shields
Presidenta de la Comisión de Planeación,
Desarrollo y Participación Ciudadana, del
Consejo de la Alcaldía

C.P. Oscar Pérez Peña
Titular del Órgano Interno de Control en la
Alcaldía

C. José Alberto Díaz Guerrero
Contralor Ciudadano

C. Violeta Martínez García
Especialista

C. Alejandra del Pilar Moreno Rivadeneyra
Especialista

C. Eduardo Leal Hernández
Especialista

C. María Guadalupe Calderón Durán
Especialista

C. Víctor Isael Damián Cuéllar
Especialista

Incluso, de las constancias del expediente se aprecia un escrito signado por las personas especialistas el ocho de abril en donde expresan las razones por las que estiman que el proyecto impugnado se considera contrario a derecho:³⁷

Ciudad de México a 08 de abril de 2022

C. Rubén Suriel Ramírez Hernández, presidente del Órgano Especializado de la Alcaldía Benito Juárez, así como Miembros que integran al Órgano Especializado de la Alcaldía Benito Juárez conforme al artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana

PRESENTES

Nosotros, los abajo firmantes, en calidad de Especialistas Dictaminadores asignados a la Alcaldía Benito Juárez, queremos dejar constancia con respecto a TODOS los proyectos descritos como compra de patrullas, moto patrullas y contratación de policías, (con cada una de sus variantes y/o adecuaciones según sea el caso), los que hacen a aproximadamente 115 proyectos más 41 redictaminaciones y que a lo largo de las diversas sesiones en las cuales fungimos como especialistas dictaminadores del presupuesto participativo 2022 hemos consistentemente votado en contra de los mismos, pues violentan la ley se contraponen con las facultades del Gobierno de la Ciudad de México establecidas en la Constitución de la Ciudad de México, así como con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Sin embargo, los miembros de este órgano, al ser un órgano colegiado han aprobado la factibilidad de estos proyectos contra nuestra voluntad en sesiones de dictaminación y redictaminación por lo que a través de este medio manifestamos nuestra inconformidad al respecto y nos deslinamos de cualquier responsabilidad tanto civil como penal y/o administrativa, y refrendamos nuestro voto en Negativo a que se aprueben los vehículos aquí señalados por ir en contra de nuestra conciencia y de la ley conforme a los siguientes argumentos:

- Los proyectos referidos violan las atribuciones establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México.

Así, a partir de lo anterior, se considera que el Tribunal local debió atender a la integralidad de los motivos de disenso expuestos por la parte actora en el escrito primigenio de demanda para dilucidar si el proyecto votado cumplió la exigencia de dictaminación de conformidad con la normativa aplicable.

En mi punto de vista, no es una medida acorde con una visión de tutela judicial efectiva e integral, considerar la circunstancia de que las etapas de dictaminación y re-dictaminación hubieren transcurrido, ya que la revisión sobre la legalidad del procedimiento puede conllevar el análisis de todos los elementos que la

³⁷ Visible a foja 387 del cuaderno accesorio único del expediente que se resuelve.

conformaron, entre ellos por supuesto de manera destacada, lo atinente a si el proyecto cumple los parámetros básicos previstos en la Ley de Participación Ciudadana, pero a su vez, también si no se está en presencia de un supuesto en el que la etapa de dictaminación haya sido omitida o bien, si el dictamen correspondiente revele una irregularidad insostenible que no pueda justificar la determinación dictaminatoria.

Por supuesto, esa irregularidad o gravedad es manifiesta cuando por ejemplo, se carece de una dictaminación (en razón de que los dictámenes se encuentren en blanco; cuando haya una irregularidad u oposición entre dictámenes rendidos en diferentes momentos; o bien, cuando el propio contenido del dictamen no permita visualizar con certeza si su sentido es positivo o negativo), casos que citados ejemplificativa y no limitativamente denotan un absoluto grado de certeza sobre la conclusión a la que se arribó en el dictamen.

En ese orden, si en el caso particular los agravios se encontraban encaminados a evidenciar dicha situación de ilegalidad, es que debieron ser debidamente atendidos por el Tribunal Local y no ser calificados de inoperantes aduciendo que no resultaba oportuna la impugnación del proyecto una vez concluida la jornada ciudadana.

Así, considero que el sentido de la presente determinación debió ser **revocar** la resolución impugnada para que el tribunal Local estudiara los agravios que evidencian la ilegalidad del proyecto ganador, abordando, entre otros tópicos, los relacionados con el dictamen aludido.

Es importante sostener este posicionamiento en el caso concreto, dado que aun cuando reconozco como premisa que debe existir un grado relevante de certeza y confianza a los procedimientos y al resultado de estos mecanismos de participación ciudadana, no debe dejarse de lado que en algunos casos, pueda existir alguna irregularidad legal o de dictaminación técnica que trastorquen sus principios esenciales, lo que al menos debe ser objeto de una revisión modulada en el ámbito jurisdiccional.

Esas son las razones que formulo con relación al presente asunto y los efectos que a mi juicio corresponden, las cuales me llevan a apartarme de la decisión de la mayoría y emitir el presente **VOTO PARTICULAR**.

Por lo hasta aquí expuesto y fundado es que formulo el presente **voto particular**.

MAGISTRADO

JOSÉ LUIS CEBALLOS DAZA

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior 3/2020 que implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral.